

## EL RINCÓN DE LA ACADEMIA

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia presenta en **Turismo y poblaciones vulnerables** un viaje de las comunidades hacia su propio encuentro. El editor **Fredy Ochoa** presenta seis casos de procesos de extensión social con comunidades en situación de vulnerabilidad de diferentes regiones que buscan hacer del turismo una alternativa para mejorar su calidad de vida. Los seis casos tienen varias apuestas en común: el empoderamiento de poblaciones de base con miras al desarrollo local mediante el establecimiento de redes de colaboración estratégica, el

autorreconocimiento de los valores culturales y sociales de dichas poblaciones, y la apuesta por tipologías emergentes de turismo. En respuesta a la problemática de pobreza e inequidad del país, el libro presenta, por ejemplo, el caso de emprendimientos de minorías étnicas del Pacífico colombiano. Frente a los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y reinserción que caracterizan a algunas regiones apartadas del país, se presenta el caso de iniciativas comunitarias campesinas que dejaron las actividades ilícitas para convertirse en prestadores de servicios asociados con el turismo. Y así, cinco historias más de procesos similares.

## ¿Que se aguanten?

RODRIGO UPRIMNY \*



¿DEBEN LOS VECINOS DE UNA ESTACIÓN de policía que sufren afectaciones a su propiedad o integridad personal por ataques guerrilleros dirigidos contra esa estación aguantarse y asumir solitariamente esos daños? ¿O debe el Estado indemnizarlos para que puedan rehacer sus vidas?

Esa es la verdadera pregunta que plantea la reciente sentencia del Consejo de Estado que ordenó al Estado que indemnizara las destrucciones de unas edificaciones vecinas de una estación de policía, que fue atacada por guerrilleros en Puerto Rondón (Arauca), en 1999.

Es obvio que la responsabilidad principal es de la guerrilla, que realizó los ataques provocando daños graves a la población civil. Ese comportamiento no es excusable y la guerrilla debería reparar esos daños. Pero, por usar la misma ironía del editorial de *El Tiempo* que criticó el fallo, sucede que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca; y aquí resulta iluso pensar que hoy las víctimas pueden lograr que la guerrilla las indemnice. ¿Deben entonces esas víctimas quedar desamparadas? ¿O el Estado tiene algún deber de repararlas?

El Consejo de Estado en esta sentencia, que no es una sorpresa pues reitera fallos anteriores, concluyó que el Estado tiene un deber de indemnizar, no porque haya ocasionado directamente el daño, sino por otra razón: porque si la guerrilla ataca un establecimiento militar o policivo y le ocasiona daños a un particular, entonces no es justo que esa persona tenga que soportar ese perjuicio y deba asumir solitariamente sus consecuencias económicas. Y no es justo porque la decisión estatal de tener un establecimiento militar o policial en cierta zona aumentó, dada la dinámica de la guerra, el riesgo de un ataque guerrillero en ese lugar. E incrementó el riesgo de daño para los vecinos. Y si esos daños ocurren, entonces el Estado debe indemnizarlos por el riesgo que creó.

Repito para evitar equívocos: la responsabilidad primaria por esos daños y el deber esencial de repararlos es de la guerrilla; y eso debería ser una exigencia en el proceso de paz. Además, el Consejo de Estado no exculpa en ningún momento a las guerrillas, pero concluye que es injusto que el Estado, que fue quien tomó la decisión de localizar la estación de policía en un sitio determinado, les diga a las víctimas del ataque guerrillero: "de malas, aguántense, o demanden a la guerrilla". Lo justo es que el Estado apoye e indemnice a esas víctimas. Y que, en el futuro, tome medidas para prevenir, hasta donde sea razonablemente previsible, esos riesgos y daños a la población.

Y en ese aspecto, la sentencia no plantea nunca que la policía o el ejército deban retirarse de las zonas de actividad guerrillera. Simplemente plantea que en estos territorios las autoridades tienen que ser muy cuidadosas en poner las estaciones de policía en lugares que le permitan cumplir sus funciones de protección, pero sin imponer riesgos desproporcionados a la población. Es una exigencia razonable para Cundinamarca, que sería innecesaria en Dinamarca.

\* Director Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional

## Rasgos y Rasguños

## Por Osuna



Celac los juntó

## Inútil, costosa y contraproducente

ALFREDO MOLANO BRAVO



LOS 15 DE FEBRERO SON PARA MÍ, POR lo menos, desagradables. Hace tiempo, después de vivir sin orden en los Llanos durante las vacaciones, ese día tenía que volver al colegio. Años más tarde, en esa fecha mataron a Camilo Torres. Ahora el Gobierno, barajando una carta sospechosa, reanuda las fumigaciones de cultivos de coca el próximo 15 de febrero. Los aviones con sus alas llenas de roundup —herbicida producido por la criminal Monsanto— volverán a levantar vuelo en Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Nariño y Guaviare. Medio país bañado de veneno. Van 20 años fumigando y la coca sigue campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar el consumo es fallida. Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo plazo la fumigación es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las Farc, para cotizarlas a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro está, contribuir al enriquecimiento de Monsanto. "En los últimos 12 años Colombia —informa la Silla Vacía— ha asperjado 1,5 millones de

hectáreas, un promedio de 128.000 hectáreas al año o de una hectárea cada cuatro minutos"... y nada. Siguen existiendo unas 50.000 hectáreas de coca. Con un agravante: las maticas producen cuatro cosechas en vez de una, el alcaloide contenido en la hoja es del 90 % en lugar del 40 % que tenían antes, y las técnicas de producción son mucho más refinadas. No sólo no han logrado reducir la producción de cocaína, sino que han hecho que los cultivos migren de una región a otra, destruyendo selva y haciéndoles campo a la ganadería y a la palma africana. La fumigación de cultivos ilícitos es la causa del desplazamiento campesino, porque además de secar las matas de coca, mata los cultivos de maíz, yuca, plátano y de pasto para las tres vacas que tienen. Los aviones sueltan el veneno pero, como en el caso de Ecuador, "deriva por el viento" y cae no sólo sobre la coca. Es pues un arma que, como las trampas explosivas de las Farc, no discrimina, característica que es lo que las hace, a ojos del DIH, artefactos terroristas. En efecto, la fumigación causa terror en las zonas campesinas. Es un hecho comprobado que afecta la piel y aumenta los abortos. Más criminal aún: ha sido establecido que "las tasas de mortalidad infantil en municipios fuertemente asperjados son más altas que en otros similares pero sin cultivos de coca" y que la tasa de homicidios aumenta. Por esas razones, Ecuador demandó a Colombia ante la

Corte de La Haya. Era evidente que el veneno botado en el río Mecaya caía en Lago Agrio. Colombia reconoció el efecto, prometió no volver a hacerle daño y pagó en compensación 15 millones de dólares. Obligada, por supuesto, lo que indica que los argumentos de Ecuador serían acogidos "científicamente" por la corte internacional. Corree se prepara para vigilar la frontera. Hay que sumar a todo lo anterior el efecto político que tiene la guerra contra la droga en las zonas de cultivo: la gente se aferra a la guerrilla porque es de hecho su fuerza defensiva. Los colonos bombardeados con veneno legitiman las acciones contra el Ejército, que va detrás de la Policía antinarcóticos, que, a su vez, va detrás de los contratistas armados extranjeros. ¡Una cadena vergonzosa! Y lo peor: para nada. O mejor, para algo: alimentar la guerra, el resentimiento campesino, el desplazamiento, el avance de la palma africana. ¿Cuánto le cuesta al país esta ridícula estrategia? Nadie sabe. Y los que saben lo mantienen en secreto, mientras en los estados de Washington y Colorado, en Uruguay, Holanda y Portugal se abre camino la regulación a través de la progresiva despenalización. No es fácil entender el hecho de estar negociando el problema de los cultivos ilícitos en La Habana mientras en el país el Gobierno agrava la situación fumigando la economía de colonos y campesinos. Entretanto, los gringos siguen metiéndose todo lo que les llega.